

Rancagua, tres de mayo de dos mil veintidós.

VISTOS:

En el presente juicio posesorio Rol C-71-2018, ingreso Corte N° 567-2021, seguidos ante el Juzgado de Letras y Garantía de Litueche, caratulados “Campos con Donoso”, la juez suplente de dicho tribunal, doña Paula Najle Spuler, por sentencia de diecinueve de diciembre de dos mil veinte, decidió rechazar la querella de restablecimiento interpuesta por los actores, sin costas, resolviendo también las incidencias de objeción documental y tachas deducidas en el proceso.

En contra de la referida sentencia, la parte demandante interpuso recursos de casación en la forma y de apelación.

CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LA CASACIÓN:

1.- Que el recurrente funda la casación interpuesta en el numeral 5° del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 170 N° 4° del mismo cuerpo legal, consistente en que la sentencia no contiene las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la misma.

Aduce que en el considerando décimo séptimo el fallo efectúa una reseña de la prueba documental y testimonial aportada por su parte, mencionando además que se solicitó tener a la vista las causas roles 214-2006 y Rol 289-2007. Agrega que, sin embargo, se trata de una simple enumeración de tales probanzas, sin analizar ni expresar de qué forma no acreditan que la parte querellante se encuentra en posesión material del inmueble por más de un año completo; y que dicha posesión haya sido tranquila y no interrumpida durante el transcurso de un año a lo menos, y finalmente que los querellantes hayan sido despojados violentamente en su posesión por actos claros y precisos realizados por el querellado.

En tal contexto, indica el recurrente que de haber efectuado un somero análisis de la prueba documental el tribunal necesariamente debió concluir que los días 13 y 14 de febrero de 2018, el querellado señor Juan Luis Donoso Quijada ingresó a la propiedad que es parte de las



denominadas “Vacantes de Gutiérrez”, en el sector de Licancheu y con el apoyo de un vehículo especial y maquinaria pesada destruyó el deslinde del predio, modificó el ingreso al terreno y depositó dos container, sin autorización alguna. Además, con los expedientes solicitados tener a la vista, se acreditó que el querellado no tiene conocimiento alguno de las causas conocidas por el tribunal en el año 2006, Rol 214-2006, sobre precario, y de lo discutido y fallado en la causa Civil Rol 289-2007, de reivindicación, en la cual los señores Donoso y Pardo -que no tienen relación alguna con el querellado- fueron vencidos en su intento de lograr la restitución del inmueble o que se les reconociera el dominio o posesión sobre las denominadas “Vacantes de Gutiérrez”.

Señala, finalmente, que de haber analizado esta prueba el tribunal necesariamente estaba en condiciones de acoger la querella posesoria de restablecimiento, la cual puede ser interpuesta incluso por el mero tenedor.

2.- Que como es posible advertir de la fundamentación del recurso de casación anteriormente reseñada, lo que pide el recurrente con su interposición, en el fondo, es que se efectúe la valoración de su prueba documental y testimonial que aduce no valorada en el fallo, y con ello, modificar la decisión del tribunal que no hizo lugar a su querella de restablecimiento.

De tal modo, siendo un tema de valoración probatoria, ello corresponde efectuarlo igualmente a través del recurso de apelación que dicha parte también dedujo en forma subsidiaria.

En tal contexto, aparece que el recurrente de casación no ha sufrido un perjuicio que sea reparable solo con la invalidación de la sentencia, toda vez que, como se indicó, por los mismos fundamentos, ha interpuesto recurso de apelación y, por lo tanto, la sentencia será revisada y modificada con arreglo a derecho, si ello resulta pertinente, conforme al análisis que corresponde efectuar en este último recurso, con lo que se da cumplimiento asimismo a lo dispuesto en el inciso penúltimo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.

De acuerdo a lo señalado, el recurso de casación en la forma deducido por la demandante no puede prosperar.



EN CUANTO A LA APELACIÓN:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus considerandos vigésimo y vigésimo primero, los que se eliminan;

Y SE TIENE EN SU LUGAR, Y ADEMÁS, PRESENTE:

En cuanto a la objeción de documentos:

3.- Que el recurrente apela de la sentencia en cuanto el tribunal no acogió la objeción que dedujo contra el contrato de arrendamiento de predio rústico acompañado por la querellada, señalando que éste, no fue otorgado por escritura pública ni se trata de un documento privado suscrito por dos testigos, tal como lo ordena el artículo 5 del Decreto Ley 993, por lo tanto dicho documento es falso y no puede acreditar mera tenencia ni posesión por la parte querellada.

4.- Que como se advierte de los términos de la objeción planteada, ella se sustentó en que el contrato de arriendo de predio rústico acompañado por la querellada era falso, pero tal como lo señaló la sentenciadora del grado, no se invoca ningún hecho constitutivo de falsedad, sino que la impugnación dice relación propiamente con el valor probatorio del mismo, cuestión que corresponde evaluar de forma exclusiva al sentenciador, razón por lo que la objeción debe ser desestimada.

En cuanto al fondo:

5.- Que conforme lo alega el recurrente, la acción interpuesta resulta pertinente, por cuanto el querellado Juan Luis Donoso Quijada, hizo ingreso violento, provisto de maquinarias, rompiendo linderos y acomodó caminos para ingresar al predio que pacíficamente poseen sus representados desde hace más de 100 años, y así se resolvió en los juicios anteriormente citados de precario y reivindicación. Agrega que los querellantes cumplen con todos los requisitos para que su acción sea acogida, pues al momento del despojo se encontraban en posesión material del terreno, y ello previamente lo había reconocido el Juzgado de Letras y Garantía de Litueche, ratificado en su oportunidad por la I. Corte de Apelaciones. Igualmente, Carabineros pudo constatar la violencia con la que actuó el querellado, la destrucción de linderos y las amenazas ejecutadas con la



maquinaria pesada de que se valió aquél, y tales hechos se encuentran acreditados con la prueba documental acompañada por su parte, y con la declaración de los testigos Héctor Cerda Sepúlveda y Elizardo Antonio Carrasco Núñez. A su vez, los expedientes judiciales tenidos a la vista demuestran que el querellado no es parte en las señaladas causas de precario y reivindicación, siendo un tercero extraño al predio denominado Vacantes Gutiérrez, y por lo tanto, se sentía con derecho a desestimar las resoluciones judiciales dictadas por el Juzgado de Letras de Litueche y la Corte de Apelaciones de Rancagua en tales procesos. Asimismo, los documentos acompañados por la contraria refieren a propiedades que adquirió Carlos Donoso Pardo, a quien precisamente los tribunales no dieron razón a sus pretensiones y rechazaron sus acciones judiciales, y de tal modo, el querellado actúa en abierto desacato a lo resuelto por los Tribunales. Pide en definitiva revocar la sentencia y acoger en todas sus partes la querella de restablecimiento de autos.

6.- Que, el artículo 928 del Código Civil señala que “todo el que violentamente ha sido despojado, sea de la posesión, sea de la mera tenencia, y que por poseer a nombre de otro, o por no haber poseído bastante tiempo, o por otra causa cualquiera, no pudiere instaurar acción posesoria, tendrá sin embargo derecho para que se restablezcan las cosas en el estado que antes se hallaban, sin que para esto necesite probar más que el despojo violento, ni se le pueda objetar clandestinidad o despojo anterior. Este derecho prescribe en seis meses. Restablecidas las cosas y asegurado el resarcimiento de daños, podrán intentarse por una u otra parte las acciones posesorias que correspondan”.

A su vez, el artículo 549 del Código de Procedimiento Civil establece que los juicios posesorios pueden intentarse para, entre otros, “obtener el restablecimiento en la posesión o mera tenencia de los mismos bienes, cuando dicha posesión o mera tenencia hayan sido violentamente arrebatadas”.

7.- Que la jurisprudencia a propósito de la presente acción ha señalado que “la querella de restablecimiento corresponde a una de las acciones posesorias que, como lo establece el ordenamiento jurídico, tienen



por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes inmuebles, garantizando su disfrute pacífico. En el caso del interdicto en análisis, la protección se extiende más allá del ámbito de la posesión cautelando, incluso, la mera tenencia, en concreto, cuando el poseedor o mero tenedor ha sido despojado violentamente de la misma. Más allá de la discusión sobre su naturaleza precisa, es claro que este instituto no exige acreditar la posesión para otorgar legitimación activa, sino que basta con probar el despojo, esto es, la concurrencia de un acto violento, sea que se ejerza contra las personas o las cosas, que prive al querellante del inmueble que tiene o posee (Rol N° 12.238-2017). De antaño se ha resuelto que esta querella posesoria procede incluso contra el dueño del inmueble (Gaceta Jurídica de 1913, Primer Semestre, página 998)”.

8.- Que, a su vez, y en el mismo sentido, la doctrina indica que la querella de restablecimiento es “la que se concede al que ha sido despojado violentamente de la posesión o mera tenencia de un inmueble, a fin que le sea restituido, en el estado existente antes del acto de violencia”. Se agrega que también se le denomina “querella de despojo violento” por cuanto tiende a evitar que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Igualmente, se reitera que no es necesario probar posesión; basta acreditar el despojo, y cumplida su función, es decir, restablecida la situación al estado anterior al acto de violencia, pueden ejercitarse las acciones posesorias que correspondan (Peñailillo, Daniel; Los Bienes; Ed. Jdca. de Chile; 2007, pp. 558-559).

El profesor Fernando Rozas, a su vez, en concordancia con la jurisprudencia y doctrina anteriormente señalada, indica como requisitos específicos para la procedencia de la querella de restablecimiento: 1°, haber sido despojado de la posesión o de la mera tenencia, y; 2°, que el despojo haya sido violento. Añade expresamente que no es requisito de la querella de restablecimiento el haber poseído o haber sido mero tenedor por determinado tiempo (Rozas, Fernando; Los Bienes; Ed. Jurídica. Conosur; 1998, p. 406).

9.- Que, atendida la naturaleza de la acción en análisis, tendiente únicamente a la restitución inmediata de las cosas al estado en que antes se



hallaban, el artículo 564 del Código de Procedimiento Civil precisa que la sentencia pronunciada en la querella de restablecimiento deja a salvo a las partes, no sólo el ejercicio de la acción ordinaria en conformidad al artículo 563, sino también el de las acciones posesorias correspondientes (amparo y restitución).

10.- Que, ahora bien, en el señalado contexto, cabe señalar que conforme al testimonio del testigo de la querellante Héctor Cerda Sepúlveda, la propiedad materia de la acción de autos pertenece a la sucesión Madrid, y que el febrero de 2018, al pasar por el camino que enfrenta la propiedad vio que habían dos container y los cercos estaban rotos. Los terrenos donde estaban los container están situados entre el camino que va hacia la Boca y el sector denominado El Bajío. Añade que con anterioridad al 13 de febrero de 2018 -fecha de los hechos denunciados-, los cercos de la propiedad en favor de la que se recurre se encontraban en perfecto estado y cerraban aquélla; en tanto que luego de esa fecha se encontraban destruidos y había dos container dentro del predio. Señala, igualmente, que sabe que el predio señalado siempre estuvo en posesión de la familia Madrid, primero como vacantes de Gutiérrez, alrededor de 50 años, y luego en forma individual de los querellantes, alrededor de 9 a 10 años.

El testigo Elizardo Carrasco Núñez, por su parte, señala que el día 13 de febrero de 2018, encontrándose en labores de gasfitería, pudo ver el problema que tenía don Ramón Madrid, constatando que el cerco de su sitio estaba cortado, palos botados y nivelado el terreno para entrada de camiones y un container dentro del sitio, y luego llegó otro camión con un container más. Se produjo una discusión e incluso se llamó a carabineros.

11.- Que, por su parte, la testigo de la querellada, doña María Filomena Campos Ibarra, señala que conoce el terreno de los querellados desde hace muchos años, y siempre han estado en posesión de aquel. Describe el mismo, señalando que también hubo una perturbación de la posesión de ese predio a la familia de los querellados. Se extiende luego la testigo respecto de los vínculos de parentesco de los querellados.



El testigo Manuel Campos Torres se refiere, a su vez, al tiempo que la familia de los querellados han estado en posesión de la propiedad que indica, y describe también el mismo, señalando a qué se le destina.

El testigo Nelson Soto González señala, por su parte, que sabe que el terreno por el cual se discute es de los querellados, y describe también el mismo.

12.- Que de acuerdo a la naturaleza de la acción en análisis, según se ha dejado expuesto precedentemente, lo que corresponde determinar es la existencia del despojo violento alegado, y ese contexto, tal evento se encuentra descrito con precisión por los testigos de la actora, al referirse expresamente a la destrucción del cerco que cerraba el predio en favor del cual recurren los querellantes, y a la instalación de dos container en su interior.

Estos testimonios, a la vez, presentan plena coincidencia con las fotografías acompañadas por el actor, y que dan cuenta justamente de la presencia de los señalados container y del cerco destruido, algunos de cuyos maderos se pueden observar en el suelo.

Lo mismo emana del mérito de la carpeta investigativa acompañada a los autos.

La prueba testimonial de los querellados, en tanto, se centró en la discusión de los títulos respectivos tendientes a la acreditación del dominio o posesión de los terrenos en conflicto, pero ello, por la naturaleza de la acción deducida, como ya se ha señalado, no corresponde debatirla en la especie, sino que tal resulta ser una cuestión posterior, restablecida la situación original, previo al actuar violento que se denuncia, y que con la prueba testimonial de la actora se ha acreditado suficientemente para los efectos de la presente acción, reiterando que la querella de restablecimiento únicamente busca evitar que las partes solucionen sus conflictos relativos a inmuebles mediante justicia de propia mano.

Por lo mismo, la profusa documentación acompañada en esta causa tampoco resulta apta para su resolución.



13.- Que de conformidad a lo expuesto precedentemente, corresponde hacer lugar a la acción en estudio, en los términos que se señalarán en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 186 y 764 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se resuelve que:

a) Se **RECHAZA** el recurso de casación en la forma deducido en lo principal de la presentación de folio 62 por el abogado Pedro Valdivia Zamorano.

b) Se **RECHAZA** la objeción documental deducida por el mismo abogado en contra del contrato de arriendo de predio rústico acompañado por la querellada.

c) Se **REVOCA**, sin costas del recurso, la sentencia apelada de fecha diecinueve de diciembre de dos mil veinte, rolante en folio 58 de la tramitación virtual de esta causa, en cuanto se rechazó la querella de restablecimiento deducida por el actor, **y en su lugar** se declara que **se acoge** la misma, y se ordena al querellado restablecer la situación del predio en cuestión al estado anterior al acto de violencia a que se refieren estos antecedentes.

Regístrese y devuélvase en su oportunidad.

Redacción del Ministro Sr. Jorge Fernández Stevenson.

Rol Civil N° 567-2021.

No firma el abogado integrante Sr. Veloso, por no encontrarse integrando el día de hoy. No obstante de haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa.



Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua integrada por los Ministros (as) Jorge Fernandez S., Barbara Quintana L. Rancagua, tres de mayo de dos mil veintidós.

En Rancagua, a tres de mayo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

